

Santiago, veinticinco de enero de dos mil veintitrés.

Vistos:

En estos autos Rol N° 144.133-2013, seguidos ante el Ministro en Visita Extraordinaria don Jaime Arancibia Pinto, investigación relativa al delito de Secuestro con grave daño, por sentencia de seis de julio de dos mil veinte, escrita a fojas 970 y siguientes, se condenó a **Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, Alejo Esparza Martínez, Eduardo Mauricio Núñez Contreras, Héctor Vicente Santibáñez Obreque, Jaime Segundo Lazo Pérez, y Sergio Hevia Febres**, como autores del delito de secuestro con grave daño en perjuicio de Morelia del Rosario Fernández Montenegro, a la pena de **seis años** de presidio mayor en su grado mínimo, a las accesorias legales y al pago de las costas de la causa por hechos ocurridos en Valparaíso a partir de Febrero de 1974, absolviendo el fallo a **Jaime Erick Riesle Wetherby** de la acusación formulada por el mismo delito.

Impugnada esa decisión por la vía del recurso de apelación, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por sentencia de fojas 1284, de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, confirmó el fallo en alzada, a la vez que aprobó el sobreseimiento definitivo decretado, con fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, respecto de **Jaime Segundo Lazo Pérez** quien falleció el tres de octubre de dos mil veinte.

En contra de ese fallo la defensa de los condenados **Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, Alejo Esparza Martínez, Eduardo Mauricio Núñez Contreras, Héctor Vicente Santibáñez Obreque y Sergio Hevia Febres**, dedujo a fojas 1287 y siguientes recurso de casación en el fondo.



Por decreto de fecha seis de octubre de dos mil veintidós, se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la defensa de los sentenciados **Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, Alejo Esparza Martínez, Eduardo Mauricio Núñez Contreras, Héctor Vicente Santibáñez Obreque y Sergio Hevia Febres**, dedujo recurso de casación en el fondo fundado en la causal 1ª del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por el error de derecho en que habría incurrido el fallo al desestimar la circunstancia atenuante de responsabilidad contenida en el artículo 103 del Código Penal.

Refiere el recurso que el artículo 103 del Código Penal regula la prescripción gradual, siendo ésta una institución que difiere de la prescripción total, pues solamente trae como efecto la imposición de una sanción menor y tiene su fundamento en la aplicación del principio humanitario al derecho penal, señalando en particular el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Explica que el desconocimiento de tal circunstancia, conlleva la infracción del artículo 68 del código Penal, que conducía a una sanción de menor entidad a aquella que se aplicó a los encartados.

Solicita que en razón de lo expuesto se anule la sentencia y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo que reconozca la atenuante muy calificada del artículo 103 del Código Penal, aplicando una pena no superior a la presidio menor en su grado medio, acogiendo beneficios de la Ley N° 18.216.



SEGUNDO: Que previo al análisis de los recursos, es conveniente recordar que en el motivo noveno del fallo de primer grado –hecho suyo por la sentencia impugnada-, se tuvieron por establecidos los siguientes hechos:

“Que, Morelia del Rosario Fernández Montenegro fue tomada detenida una noche del mes de febrero de 1974 por efectivos de la Armada de Chile, en su domicilio ubicado en el cerro Florida de la comuna de Valparaíso. La víctima, que al momento su detención tenía 17 años de edad, es subida al vehículo en que se movilizaban los efectivos navales y es llevada en primer lugar, a la casa de su primo Patricio Fernández Avilés, quien también fue sacado de su casa detenido y fue subido a la misma camioneta de la víctima de autos, siendo ambos trasladados al Cuartel Silva Palma, ubicado en la misma ciudad.

En dicho recinto permaneció alrededor de 2 semanas detenida, sin alimentación ni medidas de higiene, sometida a interrogatorios, malos tratos físicos como golpes y aplicación de corriente eléctrica, malos tratos psicológicos como privación del sueño y amenazas tanto a su integridad física como a la de su familia, y malos tratos verbales. Luego es trasladada a la cárcel de mujeres “Buen Pastor”, lugar en el que permanece recluida por aproximadamente 2 semanas más, siendo dejada en libertad durante la segunda semana de marzo de 1974.

Durante el mes de mayo de 1974, fue nuevamente detenida en dos oportunidades por efectivos de la Armada de Chile, quienes la vuelven a conducir al cuartel Silva Palma, siendo sometida a interrogatorios. En dichas oportunidades, las detenciones fueron de aproximadamente dos días cada una.”



Los sucesos así descritos fueron calificados por la sentencia como constitutivos del delito de secuestro con grave daño, previsto y sancionado en el artículo 141, incisos tercero, del Código Penal, ilícito que fue calificado como de lesa humanidad, toda vez que el delito es de aquellos cometidos “en un contexto de irrespeto de los valores fundamentales del ser humano, a través de hechos realizados por agentes del Estado con total impunidad, dirigidos hacia una parte de la población civil contrarios al régimen imperante, a través de una persecución sistemática y brutal fundada en razones ideológicas” (motivo trigésimo primero de la sentencia de primera instancia).

TERCERO: Que en relación al recurso de casación en el fondo deducido por **Ricardo Alejandro Riesco Cornejo**, cabe señalar que consta del certificado de defunción que con fecha diecisiete de diciembre pasado se acompañó a la causa, que dicho acusado falleció el día dieciocho de agosto de dos mil veintidós, motivo por el cual, se omitirá pronunciamiento en relación al recurso deducido a su favor, debiendo volver los antecedentes a primera instancia a fin de que el señor Ministro Instructor, atento a la circunstancia referida, dicte la resolución que en derecho corresponda.

CUARTO: Que, ahora en relación al argumento contenido en el libelo de los encartados **Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Riquelme Villalobos, Alejo Esparza Martínez, Eduardo Núñez Contreras, Héctor Santibáñez Obreque y Sergio Hevia Febres**, consistente en la contravención al artículo 103 del Código Penal, la sentencia que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso desestimó en su motivo trigésimo séptimo la minorante indicada, argumentando que el delito de que se trata constituye un crimen de lesa humanidad, lo que determina su imprescriptibilidad, por ende, la improcedencia de aplicar la prescripción total alcanza a la gradual, porque no



se advierte razón para reconocer al tiempo el efecto de reducir la sanción, dado que una y otra institución se fundamentan en el mismo elemento que es rechazado por el ordenamiento jurídico en relación a estos delitos.

QUINTO: Que, sin perjuicio de lo señalado por el fallo, la jurisprudencia constante de esta Sala Penal ha utilizado dos argumentos para desestimar esta causal del recurso, en tanto se afinsa en el artículo 103 del Código Penal.

Por una parte, la calificación de delito de lesa humanidad dada al hecho ilícito cometido, obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuentemente, contrarios a las regulaciones de ius cogens provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo (entre otras, SCS N°s 17.887-2015, de 21 de enero de 2015; 24.290-2016 de 8 de agosto de 2016; 44.074-2016 de 24 de octubre de 2016; 9.345-2017, de 21 de marzo de 2018; 8.154-2016 de 26 de marzo de 2018; y, 825-2018 de 25 de junio de 2018).

Pero junto con ello, se subraya que cualquiera sea la interpretación que pueda hacerse del fundamento del precepto legal en discusión, es lo cierto que las normas a las que se remite el artículo 103, otorgan una mera facultad al juez y no le imponen la obligación de disminuir la cuantía de la pena aunque concurren varias atenuantes, (Sentencias Corte Suprema Rol N° 35.788-17, de 20 de marzo de 2018 y Rol N° 39.732-17, de 14 de mayo de 2018), de modo que el no ejercicio de esa atribución no puede configurar una infracción de ley, debiendo tener presente que, en todo caso, la estimación de la prescripción



gradual respecto de los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad afecta el principio de proporcionalidad de la pena, pues la gravedad de los hechos perpetrados con la intervención de agentes del Estado, determina que la respuesta al autor de la transgresión debe ser coherente con la afectación del bien jurídico y la culpabilidad con que actuó, por lo que, en tales condiciones, el recurso de los antes aludidos, será desestimado.

Y de conformidad asimismo con lo que disponen los artículos 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se declara:

1°.- Que **se omite pronunciamiento** respecto del recurso de casación en el fondo deducido a favor de Ricardo Alejandro Riesco Cornejo.

2°.- Que **se rechaza** el recurso de casación en el fondo formalizado por la defensa de Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Riquelme Villalobos, Alejo Esparza Martínez, Eduardo Núñez Contreras, Héctor Santibáñez Obreque y Sergio Hevia Febres, en contra de la sentencia escrita a fojas 970 y siguientes, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con fecha veintiséis de mayo de dos mil veintidós.

Que sin perjuicio de lo decidido y atento al informe psiquiátrico evacuado por el Servicio Médico Legal respecto del sentenciado Alejo Esparza Martínez, y que se tuvo por acompañado con fecha 26 de Enero de 2022, el señor Ministro Instructor deberá adoptar las providencias que correspondan en relación a la ejecución de la pena que le fue impuesta.

Regístrese y devuélvase con sus Tomos y agregados.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Valderrama

Rol N° 45.519-2022.



Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., y el Abogado Integrante Sr. Ricardo Abuaud D. No firma el Ministro Sr. Valderrama y el Abogado Integrante Sr. Abuaud, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso y ausente, respectivamente.



En Santiago, a veinticinco de enero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

